



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

Señor

JUEZ DIECISÉIS ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

E.

S.

D.

Ref.: Medio de control de **REPARACIÓN DIRECTA** de **MARCELA VELASCO CARMONA** en nombre propio y en representación de su menor hija **MARIA JOSE AGUDELO VELASCO** contra **EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI. N°. 2024 – 000207.**

JUAN ESTEBAN BEJARANO HERRERA, mayor de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de Santiago de Cali, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 1.113.654.180 expedida en Palmira (Valle), abogado en ejercicio con Tarjeta Profesional número 384.456 emanada del Honorable Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de mandatario judicial del **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI**, calidad que acredito adjuntando el Poder Especial que me fue conferido por la Directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública de la Alcaldía de Santiago de Cali, Doctora **ANA CATALINA CASTRO LOZANO**, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 29.180.813 expedida en Cali, debidamente facultada mediante Decreto número 4112.010.20.0010 del 03 de enero de 2024 “*POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA UNA DELEGACIÓN EN MATERIA DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL, ADMINISTRATIVA Y EXTRAJUDICIAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES*” por la señora Alcalde **ÁLVARO ALEJANDRO EDER GARCÉS**, Representante Legal del mismo, mayor de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de Santiago de Cali, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 94.453.964 expedida en Cali, el cual me ha sustituido de manera especial para obrar en este proceso en los precisos términos en el conferidos, que allego con el presente escrito, con sus respectivos anexos, y encontrándome dentro del término legal, con sumo respeto acudo ante su Despacho, con el fin de presentar **LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA** al proceso de la referencia, en los siguientes términos:

I. EL NOMBRE DEL DEMANDADO, SU DOMICILIO Y EL DE SU REPRESENTANTE O APODERADO, EN CASO DE NO COMPARECER POR SÍ MISMO

- El demandado corresponde al hoy categorizado **DISTRITO ESPECIAL DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI¹**, representado legalmente por su Alcalde, **ÁLVARO ALEJANDRO EDER GARCÉS**.
- El domicilio del accionado corresponde a la Ciudad de Santiago de Cali, indicando como lugar donde han de efectuarse válidamente las notificaciones judiciales Avenida

¹ Ley 1933 de Agosto 1º de 2018 “*POR MEDIO DEL CUAL SE CATEGORIZA AL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI COMO DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS*”



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

2 Norte N°. 10 – 70, Piso 3°, Torre Alcaldía – Centro Administrativo Municipal C.A.M., de la ciudad de Cali, Correo electrónico: notificacionesjudiciales@cali.gov.co.

- Funge como apoderado de la Entidad demandada, el suscrito **JUAN ESTEBAN BEJARANO HERRERA**, mayor de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de Santiago de Cali, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 1.113.654.180 expedida en Palmira (Valle), mediante poder conferido por la Doctora **ANA CATALINA CASTRO LOZANO**, en su condición de Directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública del Alcaldía de Santiago de Cali, nombrada mediante Decreto número 4112.010.20.0844 del 20 de septiembre de 2024 y posesionada mediante Acta número 725 del 08 de octubre de 2024, debidamente facultada por la señora Alcalde **ÁLVARO ALEJANDRO EDER GARCÉS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 94.453.964 expedida en la expedida en la Cali, en su condición de Alcalde del hoy categorizado **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI** y representante legal del mismo, mediante el Decreto número 4112.010.20.0010 del 03 de enero de 2024 *“POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA UNA DELEGACIÓN EN MATERIA DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL, ADMINISTRATIVA Y EXTRAJUDICIAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”* con facultades para actuar en nombre y representación de la Entidad ante las Autoridades Administrativas y Jurisdiccionales.

II. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES

En mi calidad de apoderado judicial del **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI**, desde ya debo manifestar que **ME OPONGO a la prosperidad de las pretensiones impetradas por la parte activa, o quien represente sus derechos, por los perjuicios que supuestamente se le ocasionaron, como consecuencia de las lesiones y secuelas sufridas a raíz del accidente de tránsito acaecido en fecha del 03 de septiembre de 2022, por cuanto, si en efecto se presentó una caída en el sitio referido, se evidencia una AUSENCIA DE MATERIAL PROBATORIO que determine sin duda alguna la responsabilidad del DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, de acuerdo a las pruebas aportadas en el libelo demandatorio; por lo que el material probatorio existente no es contundente para endilgar una responsabilidad del Ente Territorial en las lesiones presentadas por la aquí demandante, señora MARCELA VELASCO CARMONA, pues estas solo dan certeza de circunstancias de TIEMPO y LUGAR más nunca del MODO, antes que por el contrario, una de las pruebas mediante video, sirve para sustentar y determinar en este escenario, que lo que se configuró fue una CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA.**

Igualmente me opongo a que se condene administrativa y solidariamente a la Entidad Territorial demandada, a reparar o pagar a la señora **MARCELA VELASCO CARMONA**, cualquier suma de dinero a título de reparación, por los presuntos daños y perjuicios señalados en la demanda, por las razones que se expondrán en el presente escrito de contestación de demanda.

Así las cosas, habiéndome opuesto a la declaratoria de responsabilidad del Ente Territorial por cuanto no existen en el plenario elementos de prueba que permitan al Juzgador de instancia avizorar la responsabilidad del Distrito Especial, mucho menos podría ordenarse el pago de una condena en los términos del artículo 192 del CPACA.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

Por lo anterior, ME OPONGO a cada una de las pretensiones de la parte demandante, porque como quedará demostrado en el transcurso de la presente contestación, no existe relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva entre el hecho y el daño que sea imputable al **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI**.

III. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS PERJUICIOS RECLAMADOS EN LA DEMANDA

Me opongo al reconocimiento de los perjuicios reclamados en la presente demanda por los motivos que a continuación expondré:

PERJUICIOS MATERIALES:

Se registra en libelo demandatorio en la modalidad del Daño Emergente, la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE. (\$377.300) como consecuencia del supuesto gasto que tuvo que incurrir la señora **MARCELA VELASCO CARMONA** en el establecimiento de comercio PA MI MOTO CALI como contraprestación a los servicios prestados para la reparación de la motocicleta que conducía el día del siniestro, y que se paguen a la totalidad de los demandantes los intereses de mora que se lleguen a generar en virtud del acuerdo, desde la fecha del acta de conciliación hasta que se produzca su efectivo cumplimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1653 del Código Civil, todo pago se imputará primero a intereses; lo anterior sin que se haya demostrado en juicio que la irregularidad en la vía (hueco) fue determinante en la producción del daño.

Así pues, se insiste al Despacho, que la configuración del perjuicio material exige elementos probatorios que determinen y permitan al Juzgador declarar propio. Sin embargo, para el caso que nos ocupa, no existe prueba alguna donde pueda constatar la materialización de lo solicitado.

Es así su Señoría que ante la orfandad probatoria que revisten los perjuicios materiales demandados, no es viable la prosperidad de las pretensiones erigidas por los conceptos señalados; de lo contrario, una remota condena en contra de mi prohijada, generaría un rubro injustificado a favor de la demandante, lo que se traduciría en un enriquecimiento sin causa.

PERJUICIOS INMATERIALES:

Al respecto, es menester recordar que los parámetros fijados por el Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014, estableció los estándares correspondientes al valor de la reparación del daño en caso de lesiones, por medio de una juiciosa unificación de jurisprudencia, la cual es vinculante para todos los jueces de esta jurisdicción, resumida en la siguiente tabla:



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE LESIONES					
	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
GRAVEDAD DE LA LESIÓN	Victima directa y relaciones afectivas conyugales y paterno-filiales	Relación afectiva del 2º de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos)	Relación afectiva del 3º de consanguinidad o civil	Relación afectiva del 4º de consanguinidad o civil.	Relaciones afectivas no familiares - terceros damnificados
	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.
Igual o superior al 50%	100	50	35	25	15
Igual o superior al 40% e inferior al 50%	80	40	28	20	12
Igual o superior al 30% e inferior al 40%	60	30	21	15	9
Igual o superior al 20% e inferior al 30%	40	20	14	10	6
Igual o superior al 10% e inferior al 20%	20	10	7	5	3
Igual o superior al 1% e inferior al 10%	10	5	3,5	2,5	1,5

De conformidad con lo anterior, el operador judicial debe basar cualquier tipo de reconocimiento de perjuicios basado en la gravedad del daño que se le hubiere causado a la víctima. En ese sentido, el Consejo de Estado ha advertido que el reconocimiento de perjuicios morales, en principio, se encuentra condicionado al igual que demás perjuicios a la prueba de su causación, la cual debe obrar dentro del proceso. Por esta razón, el Juez Contencioso Administrativo al momento de decidir se encuentra en la obligación de hacer explícitos los razonamientos que lo llevan a tomar dicha decisión, en el entendido que la ausencia de tales argumentaciones conlleva una violación al derecho fundamental del debido proceso.

Por lo anterior, se solicita de manera respetuosa al Despacho se sirva negar las pretensiones de la demanda, como quiera que los rubros solicitados no se encuentran jurídicamente estructurados y su reconocimiento traduciría en un enriquecimiento sin justa causa.

IV. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

Siendo una carga procesal que el demandado ha de pronunciarse expresamente respecto de los hechos de la demanda, denotando uno a uno los que se admiten y los que negaré, en orden a satisfacer el mandato contenido en el artículo 175.2 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, la *litis contestatio* abordase así:

A LOS HECHOS PRIMERO Y SEGUNDO. - No me constan. Mi representada **ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI**, desconoce tanto el vínculo laboral que tenía la señora **MARCELA VELASCO CARMONA**, y además desconoce si en la Carrera 8 con Calle 17



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

de la ciudad de Cali, hubiera sufrido un aparatoso accidente teniendo en cuenta la inexistencia de Informe de Accidente de Tránsito donde no se evidencia la ocurrencia del siniestro, ni se puede inferir de lo aportado que lo anterior haya sido “*debido a un hueco*” como lo afirma la demandante, situación esta se verá avocada a lo probado dentro de la *litis*.

A LOS HECHOS TERCERO, CUARTO, QUINTO, OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO DÉCIMO CUARTO, DÉCIMO QUINTO, DÉCIMO SEXTO, VIGÉSIMO, VIGÉSIMO PRIMERO. - Niego los hechos. Pese a que tal como se ha indicado en la contestación a hechos precedentes, a mí representada no le costa de manera directa las circunstancias de tiempo, modo y lugar bajo los cuales se dieron los hechos por los que se presentó el accidente ocurrido el día 03 de septiembre de 2022, se precisa que no es cierto que los mismos hayan tenido como causa eficiente una falla en el servicio atribuible al **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI**. Lo anterior por cuanto a que la señora **MARCELA VELASCO CARMONA** estaba desplegando una actividad peligrosa como lo es la conducción de una motocicleta.

De conformidad con el Artículo 167 del Código General del Proceso, en aplicación por remisión expresa del artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

A LOS HECHOS SEXTO Y SÉPTIMO. – No se trata de hechos acaecidos en el siniestro objeto del presente litigio, teniendo en cuenta que no existe pruebas fehacientes sobre la ocurrencia del siniestro y las circunstancias de tiempo, modo y lugar del mismo, por ende, lo que el apoderado de la parte demandante buscaba equivocadamente presentando solicitudes a la Secretaría de Infraestructura y a la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali, era la acreditación del nexo causal del accidente de tránsito de la señora **MARCELA VELASCO CARMONA**, de lo cual hay inexistencia del mismo.

A LOS HECHO DÉCIMO SÉPTIMO, DÉCIMO OCTAVO, DÉCIMO NOVENO, VIGÉSIMO SEGUNDO, VIGÉSIMO TERCERO, VIGÉSIMO CUARTO Y VIGÉSIMO QUINTO. - No se trata de hechos acaecidos en el siniestro objeto del presente litigio, son afirmaciones subjetivas del apoderado de la parte demandante.

V. FUNDAMENTACIÓN FACTICA Y JURIDICA DE LA DEFENSA AL CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

Sobre los hechos expuestos en la demanda, es importante precisar que **NO EXISTE INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO**; que sirva para determinar lo narrado en los hechos del escrito de conciliación, no hay como establecer la existencia de los huecos que enuncia y si efectivamente los hubiera, se desconoce sus dimensiones (ancho, largo, profundidad) ni de la cantidad, ni de la ubicación y las condiciones sobre la vía.

En relación con lo anterior, la doctrina ha indicado, mediante Sentencia T-475/18:

INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRANSITO - No es un informe pericial sino un informe descriptivo.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

"El marco normativo y el manual permiten establecer que el informe policial de accidente de tránsito no es un informe pericial, sino un informe descriptivo. Este informe, a su vez, tiene unos criterios de evaluación propios, que no son los establecidos por el CPG o el CPACA para este tipo de prueba. Esta evaluación implica, entre otras, que la ratificación del informe debe hacerse según el protocolo establecido en el manual, es decir, que las preguntas planteadas en el proceso deben estar orientadas a establecer si el agente se ciñó al protocolo. Asimismo, el hecho de que el manual del diligenciamiento entienda que el informe policial de accidente de tránsito puede hacer parte de un proceso, implica que aquel debe ser considerado como un material probatorio, el cual se revisa en conjunto con otras pruebas." (Negrilla y subraya fuera del texto).

En cuanto a las lesiones sufridas por la señora **MARCELA VELASCO CARMONA**, se logra advertir que no se allegó prueba alguna que cumpla con las condiciones necesarias de pertinencia, conducencia y eficacia, para ostentar poder de convicción en relación con el hecho que se pretende probar.

Estas condiciones pueden ser definidas así:

"La pertinencia o relevancia consiste en que haya alguna relación entre el medio probatorio y el enunciado fáctico que se pretende someter a prueba, de manera que pueda influir en la decisión correspondiente... (...)

"En virtud de la conducencia, respecto de un caso determinado, el medio de prueba debe encontrarse explícitamente autorizado, o no estar excluido expresa o tácitamente... La conducencia de la prueba no es cuestión de hecho, sino de Derecho, al encontrarse contemplada en la ley o no estar dispuesta restricción para su uso procesal; ya que legalmente puede recibirse o practicarse. La conducencia se predica de la prueba y la pertinencia de los hechos material del proceso; así, una prueba puede ser pertinente pero el medio propuesto puede no ser idóneo. Un documento privado o un testimonio no son legalmente idóneos para demostrar la venta de un bien inmueble, pues la ley exige escritura pública para su celebración (Devis 1981: 340; Parra 2007: 153). (...)"Prueba eficaz es la que resulta efectivamente útil para llevar a la convicción del juez, derivada de criterios de valoración racionales.. En suma, la eficacia de la prueba se establece efectuada su valoración o apreciación."

DE LA HISTORIA CLÍNICA

Como prueba la parte actora allega copia de la Historia Clínica de **LA IPS INVERSIONES MÉDICAS VALLE SALUD S.A.S**, cuyo documento, registra que la señora **MARCELA VELASCO CARMONA** ingresó el día 03 de septiembre de 2022 a las 8:11 am con unas lesiones producto de un accidente de tránsito, sin embargo, no dan información en qué lugar (dirección) sucedió dicho evento, ni cuáles fueron las circunstancias (modo) en que ocurrieron dichas lesiones. Solo confirman el día y aproximadamente la hora (Tiempo).

Copia de la Historia Clínica en **LA IPS CENTRO MÉDICO PLATINO LUNGAVITA**, cuyo documento, registra por parte de la señora **MARCELA VELASCO CARMONA** consulta por psicología el día 27 de septiembre de 2022 producto de la cicatriz en su frente debido al accidente, tal información, no aporta en nada, determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los supuestos hechos, antes, por el contrario, reporta que el accidente ocurrió el 09 de septiembre del 2022, lo cual dista de los hechos.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

Orden médica de procedimiento SKIPEN, el cual es un documento del 04 de diciembre de 2023, que contiene una orden para realizar un procedimiento en la cicatriz de la frente de la señora **MARCELA VELASCO CARMONA**, que tampoco sirve para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los supuestos hechos que aquí nos ocupan.

Certificado de atención médica para víctimas de accidente de tránsito expedido por **LA INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD**, cuyo documento tiene fecha del 25 de mayo de 2023, donde el médico CRISTIAN ANDRÉS CASTRO, certifica que atendió a la señora **MARCELA VELASCO CARMONA** por accidente de tránsito sufrido, el día 3 de septiembre de 2022 alrededor de las 7:23 am., en la Carrera 8 con Calle 17, de la ciudad de Cali, situación absurda, toda vez que el supuesto médico puede dar fe de este siniestro, teniendo en cuenta que no estuvo en el lugar de los hechos.

Del análisis acucioso de tal probanza, puedo manifestar que ese documento aportado en el libelo de demanda no cumple con los requisitos específicos que debe contener un documento para ostentar de "autenticidad", tal como lo establece el artículo 244 del Código General del Proceso.

"ARTÍCULO 244 C.G.P: DOCUMENTO AUTÉNTICO: Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento. Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso. También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución. Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo. La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos. Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones. En concordancia con los artículos 252 y siguientes del C.P.C"

La ausencia de estos requisitos impone DESESTIMAR ESTA PRUEBA, así lo hizo el Consejo de Estado en la sentencia precitada al indicar que:

"Así mismo, en cuanto al documento contentivo en dos folios (348, 349, cdno. 1) del extracto de la historia clínica de urgencias emitida por Hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá - Valle, en relación con la atención médica dispensada al señor Delgado Jiménez el 4 de febrero de 1996) se advierte que este no puede ser valorado en esta instancia, por cuanto no fue aportado al proceso en los términos previstos el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil (9), en esa medida no se tiene certeza sobre su autenticidad.

Así mismo la parte demandante, aporta una Bitácora de fotografías del accidente de tránsito, que está compuesta por seis (6) imágenes de las cuales, cinco (5) muestran heridas de la víctima en especial la de la frente y una (1) imagen de unos huecos en una vía, las cuales no cumplen con los requisitos que la jurisprudencia ha enmarcado para poder determinar si fue realizada en la fecha, hora y lugar de los hechos; por lo que no debería ser tenida en cuenta como prueba, teniendo en cuenta que carece de los elementos para su validez toda vez que no es posible establecer la relación entre el medio probatorio y el hecho que se pretende probar, es decir, no existe forma de establecer la época de estas imágenes, o si correspondan al lugar del accidente. La parte demandante



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

parte de la premisa que existe una omisión por parte de la Entidad a título de falla en el servicio, debido a la inexistencia de señales de advertencia sobre el estado de la vía o por la existencia de un hueco en la vía; como segunda premisa infiere que es el Ente Territorial el encargado de mantener en buen estado las vías; para concluir que se debe declarar administrativamente responsable del daño.

Sin embargo, no existe evidencia que respalde la presunción de la falla en el servicio, no existe un sustento que permita establecer la omisión alegada por la parte demandante, relativa a la existencia de un hueco o a la ausencia de señales del estado de la vía.

La parte demandante aporta un Video de la dirección plasmada en los hechos y que registra la fecha y hora de estos, y que una vez analizado con detenimiento, se evidencia con claridad que la caída de la motociclista no fue por chocar con un supuesto hueco, secuencialmente lo que se observa es que un taxi de manera imprudente por recoger un pasajero cruza la vía del carril derecho al izquierdo haciendo frenar de manera abrupta una moto y otro taxi que venía por delante de la moto de la convocante, la cual se observa, que venía rápido y tuvo que frenar perdiendo el control de la moto cayendo al piso generándose las lesiones, evidenciándose así **LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA**, pues la conductora venía a una velocidad superior a los 30 km/h que le exigía el lugar, con la vía húmeda, por el carril extremo izquierdo y con su casco abatible con la protección de su cara arriba, usar el casco protegiendo su cara posiblemente le hubiera evitado o minimizado la lesión tan fuerte que tuvo en su frente y que le ha generado tanta tristeza e incomodidad.

Así las cosas, la conductora estaba violando varias leyes de tránsito y la hipótesis de que la caída fue generada por huecos en la vía son especulativas pues es claro que ninguno de los elementos materiales probatorios aportados puede probarlo.

La Ausencia de Material Probatorio, que corrobore un nexo de causalidad entre, el daño y una falla en el servicio por cuenta del **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI**, atenta contra las pretensiones y demandas de la actora.

Por lo que se Corrobora a este Despacho, que no existe pruebas fehacientes sobre la ocurrencia del siniestro y las circunstancias del mismo, que se detalla en la demanda, por ende se denota la inexistencia y/o acreditación del nexo causal.

En ese orden, la conclusión de la responsabilidad atribuida a la Entidad como resultado lógico, no es verosímil ya que no existe un elemento probatorio que respalde la existencia de un hueco o el deterioro de la vía o de ninguna de las premisas del razonamiento planteado.

Revisado el texto de la demanda y los anexos se establece que en el presente caso no existen dos de los tres elementos constitutivos de la responsabilidad Estatal, por cuanto no hay certeza de la falla del servicio por acción u omisión y tampoco está demostrado el nexo que una el daño y la presunta omisión. Se itera que la parte demandante aporta copia de la Historia Clínica la cual solo dan cuenta de las lesiones; pese a ello la sola presencia del elemento del daño, no es suficiente para exigir una indemnización a cargo del Ente Territorial, por cuanto es requisito indispensable pero no suficiente para que se declare la responsabilidad pretendida, por lo que el daño no es imputable al **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI**, pues conforme al acervo probatorio es posible



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

concluir que la demandante no respetó las normas para la conducción de motocicletas, lo cual se traduce en una de las causales exonerativas denominada la culpa de la víctima.

VI. FRENTE AL DAÑO ANTIJURÍDICO:

Empecemos por establecer la noción de "daño". El Doctor JOSÉ N. DUQUE GÓMEZ en su obra "EL DAÑO, compilación y extractos" lo define de la siguiente manera:

"La certeza hace alusión a la verdad de su existencia, como concepto opuesto a todo lo que es hipotético, posible o eventual. Para que el daño sea indemnizable es requisito indispensable que sea cierto, verdadero e incuestionable." (..)

"...Lo contrario a la certeza es la incertidumbre que se presenta cuando no hay seguridad sobre la real existencia del perjuicio que se invoca; se dice que el daño es incierto cuando los elementos de juicio de que dispone son insuficientes para sustentar su causación. En esta situación de incertidumbre el daño no es reparable y así lo tiene plenamente establecido nuestra jurisprudencia". (..)

Este criterio, encuentra consonancia con lo establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso, norma general del Régimen Probatorio, según el cual, **"Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen."**

Como bien se puede determinar en este caso en estudio, los perjuicios en relación con los cuales se pretende obtener indemnización son los relacionados con la afección en la integridad física del demandante señora **MARCELA VELASCO CARMONA**, de los cuales se desprenden todas las pretensiones de la demanda.

Como tesis inicial se sostendrá que, con lo aportado en el libelo de demanda, no existe prueba que permita demostrar que la demandante sufrió las lesiones físicas con motivo de la pérdida del equilibrio de su motocicleta al pasar por un presunto hueco en la vía cayendo contra el piso, y mucho menos que existe responsabilidad del Ente Territorial que represento, como se verá a continuación:

DE LAS ACTIVIDADES PELIGROSAS

La actividad de conducir una motocicleta es una de aquellas que tradicionalmente se ha catalogado como una actividad PELIGROSA DE ALTO RIESGO, de manera que esa misma actividad es la generadora del daño, por lo tanto, cada ciudadano al momento de desplegarla es consciente que debe cumplir con un ordenamiento regulatorio vial. La doctrina ha estudiado las causas de accidentes de tránsito concluyendo que además de las características del entorno y de la vía, se debe observar otras de índole humano y funcionalidad del mismo vehículo (estado Técnico -mecánico). Es claro que la utilización de este tipo de automotores (motocicletas), demanda, además de una pericia de la persona que la maneja para maniobrarla en todo terreno, teniendo en cuenta la gran inestabilidad que este vehículo ofrece, para ello se debería tener cuidado y visualización del entorno, lo cual no se compadece con la inseguridad que brindan dichos vehículos para quienes lo utilizan, pues no poseen ningún sistema de seguridad de la persona,



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

distinta a la propia pericia y capacidad de maniobrar de quien conduce dicho vehículo.

“Quien conduce debe prever aun aquellos eventos derivados de la imprudencia o inobservancia de los demás, ello tiene su límite en la razonable probabilidad del peligro y por ello no puede pretenderse del conductor la previsión de la remota posibilidad; a él se le exige es una actitud síquica en la que prevea aquellos Sucesos que se presentan con notorio grado de probabilidad, es decir, en lo que la ocurrencia del daño a un interés jurídico pueda ser evitada con su contribución activa más allá de este límite su conducta se desplaza a lo fortuito o a la fuerza mayor” (Expediente No. 9722, Diciembre 9 de 1996, Consejero Ponente, Juan de Dios Montes Hernández, subrayado y negrillas propio).

En el caso traído a examen, **NO ESTARÍA DEMOSTRADO** que la señora **MARCELA VELASCO CARMONA**, actuaba con el cuidado y la pericia requerida para conducir una motocicleta, y aplicando la normatividad de tránsito, infiriéndose que no cumplir lo anteriormente anotado, se estaría frente de situaciones ajenas a las actividades de la Administración Distrital; por lo tanto, es improcedente declarar responsabilidad a la Entidad Territorial que represento.

Ahora bien, me permito señor Juez traer a colación, el pronunciamiento de la Sección Tercera del Honorable Consejo de Estado, Consejera Ponente: MYRIAM GUERRERO DE ESCOBAR, Radicación Numero: 85001-23-31-000-1995-00099-01 (16192), Bogotá D.C., veintidós (22) de Abril de dos mil nueve (2009), en los siguientes términos:

"RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR OMISIÓN - Requisitos / RESPONSABILIDAD POR OMISIÓN - Contenido y alcance.

Frente a supuestos en los cuales se analiza si procede declarar la responsabilidad del Estado como consecuencia de la producción de daños en cuya ocurrencia ha sido determinante la omisión, por parte de una autoridad pública, en el cumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le ha atribuido, la Sala ha señalado que es necesario efectuar el contraste entre el contenido obligacional que, en abstracto, las normas pertinentes fijan para el órgano administrativo implicado, de un lado, y el grado de cumplimiento u observancia del mismo por parte de la autoridad demandada en el caso concreto, de otro.

En este sentido, se ha sostenido que la falla de la administración, para que pueda considerarse entonces verdaderamente como causa del perjuicio y comprometa su responsabilidad, no puede ser entonces cualquier tipo de falta. Ella debe ser de tal entidad que, teniendo en cuenta las concretas circunstancias en que debía prestarse el servicio, la conducta de la administración pueda considerarse Como anormalmente deficiente. Nota de Relatoría: Ver sentencia del 8 de marzo de 2007, exp. 27434.

ACCIDENTE DE TRANSITO - Prueba del hecho. Inexistencia -1 CARGA DE LA PRUEBA - Obligación de las partes / CARGA DE LA PRUEBA - Corresponde a quien alega un hecho 1 MANTENIMIENTO VIAL - Responsabilidad por omisión / FALLA DEL SERVICIO POR SEÑALIZACIÓN - Inexistencia. Carga de la prueba

Se encuentra acreditado que la señora José Aria/do Naranjo sufrió lesiones como consecuencia de un accidente de tránsito que le produjeron una incapacidad definitiva de 25 días sin secuelas médico legales, sin embargo no existe prueba alguna en el proceso que indique cómo ocurrieron realmente los hechos relacionados con el accidente aludido. En ese contexto, no es posible determinar cuál habría sido la verdadera causa del accidente en el que resultaron involucrados un vehículo particular y una motocicleta, ni siquiera se conocen las características de cada uno



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

de los vehículos implicados en el asunto. Y si bien resulta ser cierto el hecho de que una semana antes del accidente se produjo el estallido de un carro bomba, acción que habría dejado un hueco sobre la carretera, siendo esta la causa de la colisión de los vehículos, por la falta de señalización, no es posible afirmar que ello hubiere sido así, como lo afirman los actores, pues según la Policía Nacional el lugar sí se encontraba señalizado, tal como se desprende del oficio No 02964 en el que se advierte que miembros del C. TI de la Policía Nacional practicaron el levantamiento del cadáver del conductor de la motocicleta, y que "si existía señalización de la presencia del cráter y de material para la 'reparación de la vía". Se requería, además, acreditar cuál fue la conducta omisiva en la que habrían incurrido las entidades demandadas, y si ésta fue la causante del accidente que involucró un vehículo particular y una motocicleta, pero además era necesario acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar del accidente. Como lo ha precisado la Sala en varias oportunidades, la carga de la prueba compete a la parte que alega un hecho o a quien lo excepciona o lo controvierte, de acuerdo con el artículo 177 del C.P.C., y si bien la ley faculta al juez para decretar pruebas de oficio, tal posibilidad no puede convertirse en un instrumento que supla las obligaciones, que corresponden a las partes en el proceso..."

Las anteriores consideraciones dan cuenta de la **INEXISTENCIA DEL NEXO CAUSAL**, y a su vez se traduce en una causal eximente de responsabilidad o causal excluyente de imputación, por existir **CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA**.

Vale traer a cita a título reiterativo las precisiones de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en Sentencia 1998-05970 de junio 9 de 2010, señalándose lo siguiente:

"2.2. El hecho exclusivo de la víctima como eximente de responsabilidad o causal excluyente de imputación (2). "Las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima constituyen diversos eventos que dan lugar a que devenga jurídicamente imposible imputar, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada dentro del mismo. En relación con todas ellas, tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración: (Osu irresistibilidad; O su imprevisibilidad Y (iii) su exterioridad respecto del demandado, extremos en relación con los cuales la jurisprudencia de esta sección ha sostenido lo siguiente: "En cuanto tiene que ver con (i) la irresistibilidad como elemento de la causa extraña, la misma consiste en la imposibilidad del obligado a determinado comportamiento o actividad para desplegarlo o para llevarla a cabo; en otros términos, el daño debe resultar inevitable para que pueda sostenerse la ocurrencia de una causa extraña, teniendo en cuenta que lo irresistible o inevitable deben ser los efectos del fenómeno y no el fenómeno mismo - pues el demandado podría, en determinadas circunstancias, llegar a evitar o impedir los efectos dañinos del fenómeno, aunque este sea, en sí mismo, irresistible, caso de un terremoto o de un huracán (C.C., art. 64) algunos de cuyos efectos nocivos, en ciertos supuestos o bajo determinadas condiciones, podrían ser evitados -

"Por lo demás, si bien la mera dificultad no puede constituirse en verdadera imposibilidad, ello tampoco debe conducir al entendimiento de acuerdo con el cual la imposibilidad siempre debe revestir un carácter sobrehumano; basta con que la misma, de acuerdo con la valoración que de imposibilidad de ejecución debe interpretarse de una manera humana y teniendo en cuenta todas las circunstancias: basta que la imposibilidad sea normalmente insuperable teniendo en cuenta las condiciones de la vida" (. "En lo referente a (11)la imprevisibilidad, suele entenderse por tal aquella circunstancia respecto de la cual "no sea posible contemplar por anticipado su ocurrencia", toda vez que "[P]rever, en el lenguaje usual, significa ver con anticipación", entendimiento de acuerdo con el cual el agente causante del daño solo podría invocar la configuración de la Causé extraña cuando el hecho alegado no resulte imaginable antes de su ocurrencia, cuestión de suyo improbable si se tiene en cuenta que el demandado podría prefigurarse, aunque fuese de manera



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

completamente eventual, la gran mayoría de eventos catalogables como causa extraña antes de su ocurrencia, más allá de que se sostenga que la imposibilidad de imaginar el hecho alude a que el mismo jamás hubiera podido pasar por la mente del demandado o a que este deba prever la ocurrencia de las circunstancias que resulten de más o menos probable configuración o a que se entienda que lo imprevisible está relacionado con el conocimiento previo de un hecho de acaecimiento cierto.

"Sin embargo, el carácter imprevisible de la causa extraña también puede ser entendido como la condición de "imprevisto" de la misma, esto es, de acontecimiento súbito o repentino, tal y como lo expresan tanto el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, como el artículo 64 del Código Civil 11 y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con la cual "Imprevisible será cuando se trate de un acontecimiento súbito, sorpresivo, excepcional, de rara ocurrencia 412 . La recién referida acepción del vocablo "imprevisible" evita la consecuencia a la cual conduce el entendimiento del mismo en el sentido de que se trata de aquello que no es imaginable con anticipación a su ocurrencia, toda vez que esta última comprensión conllevaría a que la causa extraña en realidad nunca operase, si se tiene en cuenta que prácticamente todos los sucesos que ocurren a diario ya han sido imaginados por el hombre.

"No está de más señalar, en cualquier caso, que la catalogación de un determinado fenómeno como imprevisible excluye, de suyo, la posibilidad de que en el supuesto concreto concorra la culpa del demandado, pues si este se encontraba en la obligación de prever la ocurrencia del acontecimiento al cual se pretende atribuir eficacia liberatoria de responsabilidad y además disponía de la posibilidad real y razonable de hacerlo, entonces los efectos dañinos del fenómeno correspondiente resultarán atribuibles a su comportamiento culposo y no al advenimiento del anotado suceso. Culpa e imprevisibilidad, por tanto, en un mismo supuesto fáctico, se excluyen tajantemente. En la dirección señalada marcha, por lo demás, la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha matizado la rigurosidad de las exigencias que, en punto a lo "inimaginable" de la causa extraña, había formulado en otras ocasiones:

"Así pues, resulta mucho más razonable entender por imprevisible aquello que, pese a que pueda haber sido imaginado con anticipación, resulta súbito o repentino o aquello que no obstante la diligencia y cuidado que se tuvo para evitarlo, de todas maneras acaeció, con independencia de que hubiese sido mentalmente figurado, o no, previamente a su ocurrencia.

En la dirección señalada marcha, por lo demás, la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha matizado la rigurosidad de las exigencias que, en punto a lo "inimaginable" de la causa extraña, había formulado en otras ocasiones:

(..)

"Y, por otra parte, en lo relacionado con (110 la exterioridad de la causa extraña, si bien se ha señalado que dicho rasgo característico se contrae a determinar que aquella no puede ser imputable a la culpa del agente que causa el daño o que el evento correspondiente ha de ser externo o exterior a su actividad, quizás sea lo más acaecido sostener que la referida exterioridad se concreta en que el acontecimiento y circunstancia que el demandado invoca como causa extraña debe resultarle ajeno jurídicamente, pues más allá de sostener que la causa extraña no debe poder imputarse a la culpa del agente resulta, hasta cierto punto, tautológico en la medida en que si hay culpa del citado agente mal podría predicarse la configuración al menos con efecto liberatorio pleno de causal de exoneración alguna, tampoco puede perderse de vista que existen supuestos en los cuales, a pesar de no existir culpa por parte del agente o del ente estatal demandado, tal consideración no es suficiente para eximirle de responsabilidad, como ocurre en los casos en los cuales el régimen de responsabilidad aplicable es de naturaleza objetiva, razón por la cual la exterioridad que se exige de la causa del daño para que pueda ser considerada



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

extraña a la entidad demandada es una exterioridad jurídica, en el sentido de que ha de tratarse de un suceso o acaecimiento por el cual no tenga el deber jurídico de responder la accionada".

"Por otra parte, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder activo u omisivo de aquella tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que la conducta desplegada por la víctima sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de. Indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima"

Para el Ente Territorial que represento, resulta evidente, que fue irresistible e imprevisible este hecho extraño, pues imposible es hacer frente al incumplimiento de las normas de tránsito, que han sido dotadas de sanciones para tornar difícil su inobservancia, a pesar de lo cual, la conductora en este caso decidió bajo su responsabilidad, asumir el grave riesgo que le imponía apartarse de las normas en una delicada actividad como es la conducción de una motocicleta.

Como lo ha sostenido la doctrina al tratar la actividad peligrosa del manejo de automotores, ha admitido que es obligatorio ejercer esta actividad bajo el esquema de "manejo a la defensiva", ello implica un despliegue especial de la atención y percepción por parte de los sujetos que la asumen.

Al respecto, el máximo órgano de cierre de lo Contencioso Administrativo ha dicho:

(...) "Debe recordarse que los usuarios de las vías, bien como peatones o como conductores, están en la obligación de extremar al máximo las medidas de seguridad, independientemente de que una norma les imponga dicha exigencia, pues la conducción de vehículos automotores es considerada una actividad peligrosa, lo cual implica asumir riesgos cuando se hace partícipe de ella, pero dicha obligación tiene la connotación de ser mucho más exigente para los motociclistas, por su estado total de indefensión, a tal punto que en los eventos en los que estos resultan involucrados en un accidente, siempre llevan la peor parte".

Ahora bien, sobre la conducta y previsión que le cabe asumir a los conductores de vehículos el Consejo de Estado se pronunció en los siguientes términos:

"Quien conduce debe prever aun aquellos eventos derivados de la imprudencia o inobservancia de los demás, ello tiene su límite en la razonable probabilidad del peligro y por ello no puede pretenderse del conductor la previsión de la remota posibilidad; a él se le exige es una actitud síquica en la que prevea aquellos sucesos que se presentan con notorio grado de probabilidad, es decir, en lo que la ocurrencia del daño a un interés jurídico pueda ser evitada con su contribución activa; mas allá de este límite su conducta se desplaza a lo fortuito o a la fuerza mayor..."

En este contexto, carece de sustento lo afirmado por la parte demandante en cuanto señala que el hecho implica una falla del servicio por parte de la Administración, lo cual le corresponde probar.

Así pues, se reitera sobre la gran responsabilidad de la víctima en los hechos *subjudice*, ya que de haber conducido con precaución y con total y absoluta atención sobre la vía y



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

sus actores, a la velocidad permitida, y carril debido, esto le hubiese permitido observar los posibles obstáculos de la vía para superarlo sin dificultad, es decir la conductora del vehículo con su actuar infringió disposiciones del Código Nacional de Tránsito.

Le correspondía entonces a la señora **MARCELA VELASCO CARMONA**, conducir la motocicleta atendiendo las disposiciones del Código Nacional de Tránsito, quien reza en su artículo 55:

“- Artículo 55. Comportamiento del conductor, pasajero o peatón. Toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero o peatón, debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a los demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que le den las autoridades de tránsito.”

Aunado a lo anterior, y como se pudo establecer en el registro presentado en Informe Policial de Accidentes de Tránsito No. A001629391 del 03 de septiembre de 2022 y Bosquejo Topográfico, la lesionada señora MARCELA VELASCO CARMONA, transitaba en su vehículo automotor por el carril izquierdo donde se encontraba ubicado el hueco, situación que iría también en contravía a lo establecido en la Ley 769 de 2002 (Agosto 6) "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones", cuyo tenor literal reza:

CAPITULO V. CICLISTAS Y MOTOCICLISTAS.

ARTÍCULO 94. NORMAS GENERALES PARA BICICLETAS, TRICICLOS, MOTOCICLETAS, MOTOCICLOS Y MOTOTRICICLOS. Los conductores de bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos, estarán sujetos a las siguientes normas:

Deben transitar por la derecha de las vías a distancia no mayor de un (1) metro de la acera u orilla y nunca utilizar las vías exclusivas para servicio público colectivo. Los conductores de estos tipos de vehículos y sus acompañantes deben vestir chalecos o chaquetas reflectivas de identificación que deben ser visibles cuando se conduzca entre las 18:00 y las 6:00 horas del día siguiente, y siempre que la visibilidad sea escasa.

Como bien puede observarse, no existe ningún elemento probatorio y/o indiciario para determinar que los hechos ocurrieron por causas atribuibles al Distrito Especial de Santiago de Cali, por lo tanto, no puede estimarse como un evento de exclusiva responsabilidad del Ente Territorial que represento, así las cosas, la decisión final debe resultar adversa a las pretensiones relacionada con aquéllas en razón de mi prohijada. Bajo esta panorámica Honorable señor Juez, el daño no ostenta la naturaleza de cierto, actual y determinado, motivo adicional para predicar el cumplimiento de los preceptos normativos contenidos en el artículo 90 de la Constitución Política, necesarios para sustentar el acaecimiento de este.

Por tanto, una vez establecida la existencia del daño antijurídico, abordado por la Justicia Contenciosa Administrativa, el análisis de la imputación con el fin de determinar si en el caso concreto dicho daño le puede ser atribuido a la administración pública y, por lo tanto, si es deber jurídico de ésta resarcir los perjuicios que del mismo se derivan y, en consecuencia, si se debe indemnizar.

De conformidad con el acervo probatorio allegado al plenario, es claro que, en el caso concreto, no existe forma de atribuir fáctica, ni jurídicamente el daño endilgado a la



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

Entidad Pública demandada **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI**, toda vez que no se encuentra suficientemente demostrado que el origen de las lesiones de la señora **MARCELA VELASCO CARMONA**, hubiese sido ocasionada por una actuación de la administración como pretende endilgar su apoderado, y que hubiese derivado en la producción de los graves daños que se acaban de relacionar, es decir, no son imputables a la actuación administrativa y por tanto no pueden tener la consideración de lesiones antijurídicas.

Así las cosas, no hay prueba alguna dentro del expediente que permita establecer que la ocurrencia del hecho dañino resulte jurídicamente imputable a la entidad pública en cuestión como lo entiende la demandante y mucho menos que el incumplimiento de tal contenido obligacional a cargo de la Administración pueda tenerse como una imputación adecuada del daño, en la medida en que no concurrió a determinarlo y, por ende, no se puede comprometer la responsabilidad del Distrito Especial de Santiago de Cali pues, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2344 del Código Civil, sólo quienes concurren a la producción del daño deben responder solidariamente del mismo, cosa que no acontece en el presente caso.

El Consejo de Estado, Sección Tercera, mediante la Sentencia de agosto 16 de 2007, expediente No. 30114, Radicado 41001233100019930758501, M.P Dr. Ramiro Saavedra Becerra, en sus consideraciones explica ampliamente el tema sobre el régimen de responsabilidad del Estado al que obedece tal acción, veamos algunos apartes relacionados con el tema:

EL DAÑO ANTIJURICO

El régimen de responsabilidad del Estado al que obedece tal acción tiene su fundamento en el artículo 90 de la Constitución de 1991, que le impone a aquél el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, es decir, el elemento fundamental de la responsabilidad es la existencia de un daño que la persona no está en el deber jurídico de soportar.

Se debe tener en consideración que los daños imputables al Estado pueden provenir de una conducta -activa u omisiva- lícita o ilícita y, a tales efectos la jurisprudencia aplica los títulos de imputación de responsabilidad que, de tiempo atrás, ha ido decantando: falla probada del servicio, riesgo excepcional y ocasionalmente daño especial, ya que ellos facilitan el proceso de calificación de la conducta estatal y la determinación del nexo causal entre el daño y aquélla:

Ahora bien, de una lectura literal del artículo 90 C.P., es posible entender que el régimen de responsabilidad allí consagrado es un régimen eminentemente patrimonial, en el sentido de que el Estado presta su garantía pecuniaria a los daños que en el ejercicio de su actividad pueda causar a los particulares. Sin embargo, es importante precisar que una interpretación sistemática del texto constitucional lleva a una conclusión más amplia.

En efecto, al analizar el régimen de responsabilidad del Estado por daños, no se puede perder de vista que la Constitución de 1991 es garantista de la dignidad humana y de los derechos humanos y propende porque éstos abandonen su esfera retórica para convertirse en una realidad palpable, por lo tanto, es de mayúscula importancia que a través de la responsabilidad, el juez de lo Contencioso Administrativo adelante una labor de diagnóstico de las falencias en las que



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

incurre la Administración y al mismo tiempo, una labor de pedagogía a fin de que aquellas no vuelvan a presentarse, sobre todo si los daños por los cuales se responsabiliza al Estado" a través de un título de imputación, vulneran en alguna medida los derechos humanos o la dignidad de las personas.

Además, la reparación de los daños que comprende la lesión a los derechos humanos, no se agota con el simple resarcimiento o la compensación económica, es importante que el juez además, adopte medidas -en cuanto su ámbito de competencia lo permita- a través de las cuales las víctimas efectivamente queden indemnes ante el daño sufrido, conozcan la verdad de lo ocurrido, recuperen su confianza en el Estado y tengan la certeza de que las acciones u omisiones que dieron lugar al daño por ellas padecido no volverán a repetirse.

Al respecto es importante tener en cuenta que una noción amplia de reparación va más allá de la esfera estrictamente pecuniaria del individuo, pues en ella se deben incluir los bienes jurídicos - como es el caso de la dignidad y los derechos humanos- que generalmente no pueden ser apreciados monetariamente, pero que, si resultan lesionados por el Estado, deben ser reparados mediante compensación. Solo así el principio de la reparación integral del daño cobra una real dimensión para las víctimas.

Cabe resaltar además que éstos derechos no solo se reconocen como inviolables en el ordenamiento jurídico interno, sino también en instrumentos de derecho internacional sobre derechos humanos que, al ser aprobados por el Congreso colombiano, de conformidad con el artículo 93 C.P. prevalecen en el orden interno. Por lo tanto, si son quebrantados por el Estado a través de sus diferentes órganos, por acción o por omisión, las conductas infractoras constituyen per se un incumplimiento de las obligaciones que el Estado colombiano asumió frente a la comunidad internacional y por tanto, pueden llegar a comprometer su responsabilidad, no solo en el ámbito interno, sino también a nivel internacional.

Tal es el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual Colombia es Estado Parte desde el 31 de julio de 1973 y que consagra la obligación de los estados miembros de respetar los derechos humanos consagrados en ella y en los demás instrumentos que la complementen, reformen o adicionen.

La anterior óptica debe ser tomada en cuenta por el juez de lo Contencioso Administrativo al momento de verificar si se configura o no la responsabilidad de la Administración en cada caso concreto, sea cual fuere el título de imputación que se emplee.

EL TÍTULO DE IMPUTACIÓN

Cuando se debate la ocurrencia de un daño proveniente del ejercicio de una actividad peligrosa, como lo es la manipulación de armas de dotación oficial, el título de imputación bajo el cual se resuelve la controversia es el objetivo de riesgo excepcional; sin embargo, cuando se advierte que el daño no se produjo accidentalmente sino, por un mal funcionamiento de la Administración, ello se debe poner de presente y el título de imputación bajo el cual se definirá el litigio, es el de falla del servicio. En aras del cumplimiento del deber de diagnóstico y pedagogía que tiene el juez al definir la responsabilidad del Estado y, a fin de que éste pueda repetir contra el agente que dolosa o culposamente produjo el daño, en caso de ser condenado a la correspondiente reparación.

En el régimen de imputación subjetivo de responsabilidad denominado falla del servicio probada, la responsabilidad surge a partir de la comprobación de la existencia de tres



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

elementos necesarios: i) el daño sufrido por el interesado; ii) la falla del servicio propiamente dicha, consistente en el mal funcionamiento del servicio porque éste no funcionó cuando debió hacerlo o, lo hizo tardía o 'equivocadamente y; iii) una relación de causalidad entre estos dos elementos, es decir, la comprobación de que el daño se produjo como consecuencia de la falla del servicio.

Una vez presentes tales elementos, la entidad pública demandada solo podrá exonerarse de una declaratoria de responsabilidad si prueba que su actuación fue oportuna, prudente, diligente y con pericia, es decir, que no hubo falla del servicio o; si logra romper el nexo causal, mediante la acreditación de una causa extraña: fuerza mayor, hecho exclusivo y determinante de la víctima o, hecho también exclusivo y determinante de un tercero.

CAUSAL EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD EN FALLA DEL SERVICIO

Ha dicho la Sala que el hecho de la víctima puede ser considerado como causal excluyente de responsabilidad si se prueba, no sólo que la víctima participó en la realización del daño, sino que entre su actuación y el daño existe una relación de causalidad adecuada, entendida ésta como aquella causa idónea, eficiente y preponderante, cuya consecuencia directa e inmediata es el daño mismo:

"...la aceptación de la causa extraña como causal liberatoria de la presunción de responsabilidad es, en el fondo, la consagración de la teoría de la causalidad adecuada... aplicando la teoría de la causalidad adecuada, el juez considera que la causa externa ha sido el hecho que normalmente ha producido el daño, y, en consecuencia, el vínculo de causalidad debe romperse de tal modo, que el demandado no se considere jurídicamente como causante del daño."

Se logra advertir que ninguna de las pruebas que se pretende hacer tiene como objeto los antes señalados, lo que permite afirmar, que la falla en el servicio se encuentra huérfana de prueba.

FRENTE A LA IMPUTABILIDAD

Se pretende endilgar las consecuencias del presunto accidente ocurrido el día 03 de septiembre de 2022 a mi prohijado **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI** afirmando la existencia de un hueco como causa eficiente.

Corresponde entonces a la parte demandante, demostrar en este punto, que existió la falla en el servicio de igual manera que la misma haya sido la causa que dio lugar al daño antijurídico generado, lo cual hasta a esta altura procesal no se ha demostrado.

En relación con el tema, es pertinente traer a colación lo esgrimido por el Consejo de Estado en sentencia de octubre de 1.995, Expediente 9535, señaló:

"Por lo anterior, los hechos objeto del proceso deben manejarse dentro del régimen de la falla ordinaria o probada, en el cual al demandante le incumbe la demostración de todos los elementos que configuran la responsabilidad estatal."



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

"Y, toda vez que se imputa una omisión administrativa, la parte actora debe, además de probar la existencia del perjuicio y su relación de causalidad con la omisión de la cual él se deriva, acredita la existencia de la obligación legal o reglamentaria que imponía a la administración la realización de la conducta con la cual los perjuicios no se habrían producido. O, lo que es lo mismo, debía acreditar la existencia de la falla del servicio consistente en el cumplimiento de un deber y demostrar que dicha falla fue la causante del daño".

Como bien se puede colegir, la parte demandante a esta instancia judicial no ha demostrado que haya existido la falla en el servicio que predican se materializo, así como tampoco han probado el nexo causal entre la presunta falla aludida y el daño.

Es necesario advertir nuevamente que no existe evidencia clara que indique que las lesiones sufridas por la señora **MARCELA VELASCO CARMONA**, se hayan producido por la existencia de un hueco en la vía, pues del material fotográfico, así como la existencia de un supuesto testigo y el aporte de una copia de historia clínica, son pruebas que resultan inoperantes para indicar que, de aceptar como cierta que las lesiones sufridas por la demandante sean a consecuencia de la existencia de un hueco en la vía, ello automáticamente se traduzca en una falla del servicio.

Véase como en la actualidad, en diferentes zonas de la ciudad, encontramos huecos, baches, y desgastamiento asfáltico, que tienen como origen el mejoramiento vial que se

ha emprendido por parte de la Administración, y que evidentemente no se le puede señalar como una falla del servicio pues, por el contrario, su naturaleza es la del cumplimiento de un deber legal.

En virtud de la anterior postura, la parte actora no ha probado que, si en efecto existía un hueco, el origen de éste escapaba a una causa legítima, así como que ausente estaba la vía de señalización acerca de su existencia.

Se corrobora con el acervo probatorio arrojado al plenario, ninguna de las pruebas que se pretenden hacer valer por la parte demandante, tienen como objeto los antes señalados, lo que permite afirmar, que la falla en el servicio se encuentra huérfana de prueba fehaciente.

VIII. PROPOSICIÓN DE EXCEPCIONES

INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD POR CARENCIA DE NEXO CAUSAL QUE COMPROMETA AL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI CON LOS PRESUNTOS PERJUICIOS MATERIALES E INMATERIALES SUFRIDOS POR LA PARTE ACTORA

Como se ha indicado en líneas que antecede, no basta con afirmar que había un hueco en la vía y que la señora **MARCELA VELASCO CARMONA**, se accidentó allí, pues tal afirmación no es suficiente para atribuir responsabilidad al **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI**, toda vez, que en el proceso no se encuentran los elementos suficientes para determinar la ocurrencia del hecho en los términos planteados en la demanda. Por el contrario, no existe Informe de Accidente de Tránsito que se haya



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

allegado como prueba, por lo que se evidencia de que la causa del accidente no es la presencia de un foramen en la vía.

Es así entonces, que debe examinarse la situación bajo el régimen de la falla probada, en la cual la demandante le incumbe la demostración de todos los elementos que configuran la responsabilidad estatal, y que se imputa una omisión administrativa, corresponde a la parte actora probar la existencia del perjuicio y su relación de causalidad con la omisión de la cual él se deriva, acreditar la existencia de la falla del servicio consistente en el cumplimiento de un deber y demostrar que dicha falta fue la única causante del daño.

De lo anterior se concluye que en el presente caso la demandante no ha demostrado el nexo causal entre la falla en el servicio y el daño causado, en tanto considera que, o el hecho no ocurrió, o no lo fue en las circunstancias que se indican en la demanda, pues la causa del accidente se debió a la imprudencia y a la falta de la observancia de las normas del tránsito de parte del conductor.

AUSENCIA DE LA FALLA EN EL SERVICIO.

Carece de evidencia la demanda, dirigida a establecer la existencia de huecos en la vía, que se pretende hacer ver como falla en el servicio, y de aceptar su existencia, difícil resulta afirmar que ello se traduzca automáticamente en irregularidad. Lo propio es que los demandantes demuestren que, si en efecto existió un hueco y si su origen escapaba a una causa legítima, así como que ausente estaba la vía de señalización acerca del mismo.

AUSENCIA DE PRUEBAS PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD AL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

En el presente petitum, existe una evidente carencia probatoria respecto a la acreditación de las circunstancias determinantes en que se presentó el accidente; no existe material probatorio que permita establecer la presunta falla del servicio que pretende la parte convocante sea imputada al **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI**.

Debe considerarse que no obra prueba idónea que demuestre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que supuestamente ocurrió el accidente que permita corroborar la realidad fáctica de los hechos de la convocatoria, y por ende la causa eficiente del mismo.

En efecto, hay una ausencia de material probatorio que permita estructurar una responsabilidad a cargo del Ente Público, quedando demostrado que las causas que originaron el mismo, no son consecuencia de la responsabilidad de la entidad que represento y por lo tanto no está obligado a indemnizar daño alguno.

El demandante señor **MARCELA VELASCO CARMONA**, no logra probar que la existencia del hueco en la vía fue la causa eficiente del accidente acaecido en fecha del 03 de septiembre de 2022. Por otra parte, en la lectura realizada del Informe Policial de Accidente de Tránsito No. A00 110928 allegado como prueba junto con la demanda,



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

quedan serias dudas sobre si la causa del accidente sea la presencia de un foramen en la vía.

CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA

Esta conducta culposa está definida por la Jurisprudencia como aquella que produce un resultado típico producto de la infracción a un deber objetivo de cuidado, que se presenta al no prever los efectos nocivos de un acto o habiéndolos previsto confiar imprudentemente en poder evitarlos. Se constituye diversos eventos que dan lugar a que devenga imposible imputar, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada dentro del mismo.

Tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que:

El Estatuto de la Administración de Justicia, Ley 270 de 1996 en el artículo 70 dispone que:

"Artículo 70. Culpa Exclusiva de la Víctima: El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado"

Referente a la conducción como actividad de riesgo la Corte Suprema de Justicia en Sentencia C- 1090 de 2003 expresó:

"la conducción de vehículos automotores es una actividad de suyo peligrosa. A nadie escapa la alta dosis de peligro o riesgo, que se suma al connatural del ejercicio de la actividad peligrosa de la conducción de automotores, de verse expuesto a una colisión o a cualquier otra vicisitud por el uso indiscriminado que de la vía se hacía"

Sobre la denominada "Acción a propio riesgo", el Doctor Enrique Gil Botero en su libro responsabilidad extracontractual del Estado, Sexta edición, expuso:

"Este instrumento, permite establecer cuando el daño es única y exclusivamente atribuible a la propia víctima, en tanto desconoció su deber de autoprotección y, por tanto, la defraudación del rol y la concreción del riesgo es producto de su actuar. Por consiguiente, es requisito indispensable que la víctima sea un sujeto capaz y tenga pleno discernimiento".

Como se aprecia, el fundamento de este elemento se halla en el deber de autoprotección, circunstancia por la que en los supuestos en los que el daño sea producto del actuar determinante y exclusivo de ese sujeto, en tanto asume el riesgo materializado, se enerva la posibilidad de atribuir el daño en cabeza de otro de los sujetos intervinientes.

Los requisitos que exige la Doctrina para que opere la figura son I) La víctima debe tener el control sobre el sí y el cómo del desarrollo de la situación peligrosa; II) la Víctima debe ser un sujeto auto responsable, con capacidad para comprender la dimensión del riesgo y este debe ser conocido por aquella; iii) el tercero no debe tener una especial situación de protección frente al bien jurídico (no debe tener posición de garante frente a la víctima)".



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

En el caso hoy objeto de Litis y conforme al acervo probatorio aportado con el escrito de demanda, se concluye que esta excepción se configura por las actuaciones en la vía que tuvo la señora **MARCELA VELASCO CARMONA**, y que incidieron directamente en la causación de las lesiones alegadas, tal como se manifestó antes, la aquí demandante se lastimó por las siguientes acciones que realizó:

EXCESO DE VELOCIDAD:

La vía de la Carrera 8 con Calle 17 de la ciudad de Cali, es una zona bastante comercial con alto flujo vehicular y de peatones, aparte de tratarse de un cruce vehicular, por ende, la máxima velocidad debió ser de 30 Km/h.

El artículo 74 de la Ley 769 de 2002 *“Por el cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”* señala:

“ARTÍCULO 74. REDUCCIÓN DE VELOCIDAD. los conductores deben reducir la velocidad a treinta (30) kilómetros por hora en los siguientes casos:

En lugares de concentración de personas y en zonas residenciales.

En las zonas escolares.

Cuando se reduzcan las condiciones de visibilidad.

Cuando las señales de tránsito así lo ordenen.

En proximidad a una intersección.”

DISTANCIA Y CONDICIONES DE VÍA HÚMEDA:

Claramente el video demuestra que la motocicleta no circulaba a menos de 30 Km/h, por ende, debía tener una distancia con el taxi de adelante de por lo menos 20 metros, pero de las imágenes se puede calcular que aproximadamente ni siquiera había 10 metros entre ellos, igualmente, fue imprudente por que la vía estaba húmeda lo que claramente afecta el frenado pues oprimirlo intempestivamente genera la pérdida de control del automotor.

Ibidem

“Artículo 108. SEPARACIÓN ENTRE VEHÍCULOS. la separación entre dos (2) vehículos que circulen uno tras de otro en el mismo carril de una e alzada, será de acuerdo con la velocidad.

Para velocidades de hasta treinta (30) kilómetros por hora, diez (10) metros.

Para velocidades entre treinta (30) y sesenta (60) kilómetros por hora, veinte (20) metros.

Para velocidades entre sesenta (60) y ochenta (80) kilómetros por hora, veinticinco (25) metros.

Para velocidades de ochenta (80) kilómetros en adelante, treinta (30) metros o la que la autoridad competente indique.

En todos los casos, el conductor deberá atender al estado del suelo, humedad, visibilidad, peso del vehículo y otras condiciones que puedan alterar la capacidad de frenado de éste manteniendo una distancia prudente con el vehículo que antecede.”

UTILIZACIÓN ERRÓNEA DE CARRILES

Del video se observa como la moto circula por el carril extremo izquierdo lo cual es contrario a la normatividad vigente de la ley 769 de 2002.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

“Artículo 68. UTILIZACIÓN DE LOS CARRILES. los vehículos transitarán de la siguiente forma:

Vía de sentido único de tránsito.

En aquellas vías con velocidad reglamentada para sus carriles, los vehículos utilizarán el carril de acuerdo con su velocidad de marcha.

En aquellas vías donde los carriles no tengan reglamentada su velocidad, los vehículos transitarán por el carril derecho y los demás carriles se emplearán para maniobras de adelantamiento.”

INDEBIDA UTILIZACIÓN DEL CASCO

Del video se evidencia que la convocante portaba un casco abatible y que la parte que cubre la cara se encontraba abierta, yendo así en contravía de la normatividad que dice que en movimiento el casco debe estar cerrado, de haber cumplido con esto muy posiblemente se hubiese protegido de la cicatriz producida en su frente. lo anterior se soporta en comunicado por parte del secretario de movilidad de la época que reposa en la página de la Alcaldía de Cali que reza:

<https://www.cali.gov.co/movilidad/publicaciones/159104/motociclistas-que-no-portencorrectamente-el-casco-seran-multados/>

“(…)

A partir del martes 23 de febrero de 2021, quienes no porten el casco correctamente serán sancionados económicamente porque acciones como esa y llevar el abatible o viseras abiertas se convierten en un riesgo al momento de conducir.

Así lo estipula la Resolución 23385, emitida por la Agencia de Seguridad Vial, que cumple un mes de haber sido sancionada, tiempo durante el cual regía pedagógicamente.

(…)”

La doctrina y la Jurisprudencia nacional han establecido que una de las CAUSAS EXTRAÑAS como eximente de responsabilidad administrativa ocurre cuando el hecho dañoso le es imputable a la propia víctima, lo cual destruye el nexo causal entre el perjuicio y la acción del presunto ofensor, por lo anterior no se configuran a plenitud los elementos requeridos para que pueda surgir la responsabilidad. En el presente caso la víctima participó de forma activa en la producción del accidente al no conducir su motocicleta con PRUDENCIA, PERICIA Y CUIDADO y no tener las precauciones necesarias al momento de ejercer la actividad de conducción.

Es decir, la señora **MARCELA VELASCO CARMONA**, debió tomar las precauciones necesarias como quiera que se encontraba realizando una “actividad peligrosa”, lo que demandaba conducir con mayor cuidado, a la velocidad adecuada, con su casco cerrado y por el carril que le correspondía, infringiendo así las disposiciones del Código Nacional de Tránsito, evento en el cual se rompe el nexo de causalidad que debe existir entre el daño y la falla para que se configure la responsabilidad del **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI**, pues los hechos deben analizarse en el presente caso bajo el régimen de la falla probada.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

“ARTÍCULO 55. COMPORTAMIENTO DEL CONDUCTOR, PASAJERO O PEATÓN. Toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero o peatón, debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que les den las autoridades de tránsito.

Al respecto se pronunció el Consejo de Estado en Sentencia del 22 de abril de 2009, expediente 16192:

“(…) Así mismo habría que señalar que la conducción de vehículos automotores constituye una actividad peligrosa que involucra a quienes hacen parte de ella, de forma que en aquellos eventos en los que tiene ocurrencia un accidente y, como consecuencia de ello, se causan daños, es necesario verificar la conducta de los partícipes de dicha actividad, en aras de establecer cuál fue la verdadera causa que lo provocó. En todo caso, el juez deberá tomar en consideración la peligrosidad de la actividad, la conducta de las personas implicadas en ella, la incidencia de ambas en el percance o la virtualidad dañina de la una frente a la otra. (…)” Subraya por fuera de texto.

ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA

Conforme a los argumentos esbozados en el acápite denominado declaraciones y condenas, me permito reiterar que los perjuicios aquí reclamados carecen de fundamento y de toda prueba como quiera que (i) no se evidencia soportes consistentes en facturas, recibos de caja, ni ningún otro elemento que dé cuenta de las supuestas erogaciones en que han debido incurrir el demandante a raíz del accidente de tránsito material de controversia; (ii) En el presente no existe responsabilidad por parte del **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI** razón por la cual mal podría condenarse a resarcir un daño no causado por él.

En este orden de ideas, no es viable imponer una condena y ordenar el resarcimiento de un detrimento por perjuicios no demostrados o presuntos, o si se carece de la comprobación de su magnitud y realización, ya que es inadmisibles la presunción en esa materia, de manera que una indemnización sin fundamentos fácticos ni jurídicos necesariamente se traducirá en un lucro indebido, como sucedería en un caso como el presente.

VI. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA:

En escrito separado a esta contestación de demanda me permito allegar **LLAMAMIENTO EN GARANTÍA** a la Compañía Aseguradora **MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.**, identificada con Nit. 891.170.0037-9, quien para la fecha de los hechos tenía Póliza Seguro Responsabilidad Civil Extracontractual número 1507222001226 vigente con **EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI**.

VII. PRUEBAS:

Sírvase señor Juez de Conocimiento, apreciar y otorgar el valor probatorio que en derecho corresponda a las documentales obrantes dentro del expediente, como así a las



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

que se llegaren a presentar en este libelo, y a las que a petición de parte *-o de oficio-* decrete, practique e incorpore la Instancia debidamente a la foliatura.

VIII. ANEXOS

Me permito anexar al presente escrito:

1. Copia de escrito de llamamiento en garantía con sus anexos.
2. Certificado de la Superintendencia Financiera de Colombia y de Existencia y Representación de:
 - a. **MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.**, identificada con Nit. 891.700.037-9.
 - b. **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.**, identificada con Nit 860.026.518-6-
 - c. **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA**, identificada con Nit 860.524.654-6.
3. Poder a mí otorgado en legal forma para actuar con sus respectivos anexos.

IX. NOTIFICACIONES

El suscrito apoderado las recibiré en la Avenida 2 Norte N°. 10 – 70, CAM, Torre Alcaldía, Piso 9° de la ciudad de Cali, Teléfono: 3158140587, Correo electrónico: notificacionesjudiciales@cali.gov.co o en la secretaría de su Despacho.

Las del señor Alcalde **ÁLVARO ALEJANDRO EDER GARCÉS**, se recibirán en en la Avenida 2 Norte N°. 10 – 70, Piso 3°, Torre Alcaldía – Centro Administrativo Municipal C.A.M., de la ciudad de Cali, Correo electrónico: notificacionesjudiciales@cali.gov.co.

Del señor Juez,

Atentamente,

JUAN ESTEBAN BEJARANO HERRERA
C.C.N°. 1.113.654.180 Exp./ Palmira (Valle)
T.P.N°. 384.456 C. S. de la J.